



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN CIVIL

**Medellín, veintiocho de febrero de dos mil
veinticuatro**

En atención a la orden de tutela dada por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia STC1616 del 21 de febrero de 2024 notificada a esta Sala el 23 del mismo mes y año; sería procedente continuar con el trámite del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante frente a la sentencia proferida el 15 de febrero de 2023 por el Juzgado Veintidós Civil del Circuito de Medellín, dentro del proceso verbal con pretensión reivindicatoria adelantado por LUCÍA GÓMEZ POSADA contra MARÍA EUGENIA MARÍN OSORIO; pero, se advierte una irregularidad insubsanable que imposibilita continuar adelantado el recurso de alzada.

1. ANTECEDENTES

1. LUCÍA GÓMEZ POSADA presentó demanda contra MARÍA EUGENIA MARÍN OSORIO para la obtener la reivindicación de los predios con matrículas inmobiliarias Nos. 001-402909 y 001-402757 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín (Zona Sur).
2. La demanda fue admitida mediante providencia del 25 de octubre de 2021.
3. Notificada la parte demandada en los términos del artículo 8 Ley 2213 de 2022, guardó silencio.
4. Revisados los certificados de libertad y tradición de los bienes inmuebles

con matrículas inmobiliarias Nos. 001-402909 y 001-402757 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín (Zona Sur), se acreditó:

- 4.1 LUCÍA GÓMEZ POSADA adquirió mediante escritura pública 1684 del 18 de mayo de 1987 el derecho de dominio sobre los inmuebles con matrículas 001-402909 y 001-402757; consta en anotaciones 8 y 5 de los correspondientes certificados de libertad y tradición.
- 4.2 La demandante a través de DIANA YAVID BETANCUR CÓMEZ – mandataria- transfirió los inmuebles a NOELIA DE SAN FRANCISCO CRUZ AGUDELO mediante escritura pública 31 del 10 de enero de 2003; venta registrada en anotación 12 del certificado de libertad y tradición 001-402909 y anotación 8 del certificado de libertad y tradición 001-402757.
- 4.3 NOELIA DE SAN FRANCISCO CRUZ AGUDELO mediante escritura pública 1719 del 17 de mayo de 2007 transfirió los inmuebles a MARÍA EUGENIA MARÍN OSORIO; venta registrada en anotación 16 del certificado de libertad y tradición del FMI 001-402909 y anotación 10 del certificado de libertad y tradición 001-402757.
- 4.4 MARÍA EUGENIA MARÍN OSORIO mediante escritura pública 1189 del 10 de marzo de 2011 transfirió los inmuebles a REPRESENTACIONES SIERRA & FAMILIA SAS; venta registrada en anotación 20 del certificado de libertad y tradición 001-402909 y anotación 14 del certificado de libertad y tradición 001-402757.
- 4.5 LUCÍA GÓMEZ POSADA demandó a los tres compradores subsiguientes a su venta NOELIA DE SAN FRANCISCO CRUZ AGUDELO, MARÍA EUGENIA MARÍN OSORIO y REPRESENTACIONES SIERRA & FAMILIA SAS en proceso de radicado 2011-00583, con pretensión de nulidad absoluta de la compraventa celebrada el 10 de enero de 2003; la inscripción de la demanda consta en la anotación 24 del certificado de libertad y tradición del 001-402909 y anotación 15 del certificado de libertad y tradición 001-402757.
- 4.6 En sentencia proferida el 13 de agosto de 2019 por el JUZGADO VEINTE CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, se declaró “*la nulidad absoluta,*

por objeto ilícito, del contrato de compraventa celebrado entre las señoras Lucía Argemira Gómez posada, representada por su hija Diana Yavid Betancur Gómez, y Noelia de San Francisco Cruz de Agudelo, vertido en la escritura pública No. 31 del 10 de enero de 2003...”; ordenando “a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, Zona Sur, que cancele la anotación 20 en el certificado de tradición y libertad del folio de matrícula inmobiliaria 001-402909 y la anotación 14 del certificado de tradición y libertad de la matrícula inmobiliaria 001-402757”; consta en la anotación 26 del certificado de libertad y tradición 001-402909 y anotación 20 del certificado de libertad y tradición 001-402757.

5. Desde el 20 de enero de 2018 la demandante se encuentra privada de la posesión material de los inmuebles por parte de la demandada.
6. El Juzgado Veintidós del Circuito de Medellín el 15 de febrero de 2023 profirió sentencia desestimatoria de las pretensiones al no encontrar prueba de los elementos axiológicos de la pretensión reivindicatoria, puntualmente la posesión en cabeza de la demandada.
7. La parte demandante interpuso el recurso de apelación arguyendo que con la prueba recaudada en el proceso está acreditada la posesión de la parte demandada, la identidad entre lo poseído y lo pretendido, lo cual se colige del documento expedido por la administración de la copropiedad, del certificado de tradición, del acta de sentencia proferida por el Juzgado Veinte Civil del Circuito de Medellín y la confesión ficta de la demandada que no se desvirtuó.
8. Esta Sala de Decisión emitió sentencia el 23 de agosto de 2023 confirmando la sentencia de primera instancia por razones diferentes a las que fundamentaron la decisión del 15 de febrero de 2023, por cuanto consideró la falta de legitimación en la causa por activa.
9. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia STC1616 del 21 de febrero de 2024, revocó la sentencia emitida por esta Sala y ordenó que en el término 10 días siguientes a la notificación de la

decisión se dictará providencia en la que resuelva una vez más el recurso de apelación, con sujeción a lo considerado por la Corte.

2. PROBLEMAS JURÍDICOS A RESOLVER

¿Nulidad por no practicarse en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas que deban ser citadas como partes?

¿Debe integrarse la sociedad REPRESENTACIONES SIERRA & FAMILIA SAS en liquidación como presunta poseedora?

3. CONSIDERACIONES

3.1 La posesión en cabeza de la demandada es un presupuesto axiológico que se predica de la acción reivindicatoria prevista en el artículo 946 del CC, *“La reivindicación o acción de dominio es la que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituirla”* (resaltos extratexto).

Así, el artículo 762 del CC, dispone:

“La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él. El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifique serlo.”

(Subrayas propias).

El carácter de poseedor se establece por la concurrencia en un sujeto de derecho de los elementos *corpus* y *ánimus*; el primero, es el poder material o físico que se detenta sobre la cosa; y el segundo, es un elemento psicológico que se concreta en

la intención de portarse como señor y dueño, sin reconocer dominio ajeno.

En términos de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC5342 de 2018, el *ánimus*, “**consistente en la intención de comportarse como propietario de la cosa, está vinculado inescindiblemente con la intencionalidad del ocupante, quien, al rehusarla, expresa o tácitamente, deja al descubierto que carece de la condición de poseedor.**”

En el hecho quinto de la demanda (archivo libro 1- cuaderno principal – folio 23), la parte demandante afirmó, “**Desde el 20 de enero del 2018 la demandante se encuentra privada de la posesión material de los inmuebles ya relacionados, por parte de la accionada**”; sin ilustrar sobre los actos de señora y dueña que efectúa la demandada respecto de los predios objeto de reivindicación; no tiene certeza de la posesión de la demandada; no refirió si detenta los inmuebles por sí misma o por otra persona que los tenga en lugar y a nombre de ésta.

Fue así como al absolver interrogatorio de parte realizado de manera oficiosa en audiencia a la demandante, infirma lo expresado en el hecho quinto; se le preguntó ¿cuáles son los motivos por los cuales considera que la demandada es poseedora de los inmuebles? respondiendo: “**...en 1985 yo obtuve ese apartamento... lo pagué por cuotas... y el apartamento resultó de un momento a otro a nombre de María Eugenia Marín Osorio... antes había por ahí una señora metida que se llamaba...(una hermana de ella)...y también aparecía a nombre de la señora...(la madre), no la recuerdo muy bien porque yo no conozco a ninguna de esas personas, yo he ido muchas veces a mi apartamento porque todo sale a nombre mío...no está ocupado o hay alguien por ahí pero no sé quién es, no tengo idea de quien se encuentra, he tratado porque yo ya tuve una audiencia anterior y me dieron a mí la posesión como dos veces de dos personas por unas ventas ficticias, pero yo fui y la administradora no me dejó entrar...por eso es que yo la demando a ella porque siempre que yo voy a la portería ella es la que aparece María Eugenia Marín Osorio, otra señora que se llama María Elena**

Agudelo Cruz y la madre, porque eso siempre ha aparecido con 3 ó 4 nombres y nunca aparece nadie, realmente yo no conozco a nadie...allá no hay ninguna entidad...”

Se aclaró por el Despacho de primera instancia el concepto de posesión y se insistió en la pregunta, ¿Usted porqué considera que María Eugenia Marín Osorio tiene el uso y goce del apartamento y del parqueadero, porqué se comporta en esos inmuebles como si fuera la dueña desconociéndola a usted? respondiendo: ***“porque ella en un momento que hubo en otro juzgado, dijo que era dueña porque la hermana se lo había dado, porque lo había comprado...yo no conozco a nadie de esas personas, ni a la hermana ni a la madre ni a ella tampoco...”***

Manifiéstele al Juzgado si usted habitó el apartamento, de ser afirmativo ¿en qué momento? respondió: ***“yo habité el apartamento en 1985...yo iba y venía de Estados Unidos...habité el apartamento y el parqueadero 67 hasta marzo 2011 más o menos...2011 ó 2012 algo así.”***

¿Por qué desocupó los inmuebles? respondió: ***“porque me hicieron un lanzamiento porque había una venta que apareció a María Eugenia y a la Madre y esas ventas eran ficticias...que mis hijas se las había hecho a ellas... y me sacaron...”***

¿Por qué se dice en la demanda que la señora María Eugenia ejerce posesión desde el 20 de enero de 2018? respondió: ***“porque la idea de ellas era quedarse con el apartamento...no sé porque honestas no son...es más ahí aparece una compañía que se llama Sierra SAS, pero no se ha encontrado.”***

¿Qué paso con los años de 2013 a 2018? respondió: ***“esa también es mi pregunta porque yo he ido muchas veces al apartamento... y la administradora no me deja entrar...y yo he visto gente ahí pero no que viva porque ahí me dice que ahí no vive nadie, ellas dicen que son poseedoras, pero no se...”***

Asimismo, conforme con la prueba documental arrimada por la demandante – respuesta a derecho de petición obrante en archivo 5 del cuaderno principal expediente electrónico- el 27 de septiembre de 2021 precisó la apoderada del

Conjunto Residencial Plaza de Alejandría PH que, ***“El inmueble actualmente está desocupado (sin residentes), pero con bienes muebles (enseres) de los cuales se desconoce su propiedad. Desde hace algún tiempo nadie ingresa al inmueble, las personas que ingresaban afirmaban ser propietarias del apartamento (en el último tiempo había sido la señora María Eugenia Marín Osorio), y dado el conflicto de intereses sobre el mismo y la poca claridad para la administración, en los últimos días (meses) se ha negado el ingreso hasta que alguien demuestre su calidad de propietario o mejor derecho debidamente acreditado (parece ser este el caso). Con respecto a las obligaciones de carácter pecuniario (cuotas de administración) sobre los inmuebles de su propiedad, le informamos que desde el mes de abril del año 2014 ninguno de los propietarios o tenedores del bien inmueble ha cancelado la administración, estando a corte del mes de julio de 2021 en la suma de (\$101.682.102).”***

Comunicación que da cuenta de (i) los inmuebles no están habitados hace tiempo, (ii) cuando ingresaban personas, afirmaban ser propietarios (en el último tiempo María Eugenia Marín Osorio), (iii) no existe claridad a cerca del propietario (en los últimos meses) no se permitió el ingreso y (iv) nadie ha asumido obligaciones pecuniarias desde el 2014; lo que permite inferir que pese a que MARÍA EUGENIA MARÍN OSORIO afirmó en alguna época ser propietaria del inmueble, abandonado el predio junto con los enseres, no existía para la administradora claridad a cerca de quienes eran los propietarios; lo que es coherente con el dicho de la demandante que en audiencia indicó respecto del inmueble, ***“no está ocupado ó hay alguien por ahí pero no sé quién es, no tengo idea de quien se encuentra...”***; resultando imposible concluir que para el 20 de enero de 2018 la demandada fuera poseedora o por otra persona que detentara los inmuebles en lugar y a nombre de ésta.

La sentencia proferida el 13 de agosto de 2019 por el Juzgado 20 Civil de Circuito declaró la nulidad del negocio jurídico celebrado mediante escritura pública 31 del 10 de enero de 2003 y dispuso la cancelación de las correlativas anotaciones en los certificados de libertad y tradición; si bien los negocios jurídicos subsiguientes dependían de las anotaciones canceladas, dichos certificados dan cuenta que la demandada MARÍA EUGENIA MARÍN OSORIO vendió mediante escritura pública 1189 del 10 de marzo de 2011 a REPRESENTACIONES SIERRA Y FAMILIA SAS ambos inmuebles; por lo que conforme la cadena de tradición dicha sociedad era la última que detentaba el título de propiedad, expresando la demandante en el escrito de subsanación, ***“La demanda no se dirigirá contra la sociedad “Representaciones Sierra y Familia S.A.S”, toda vez que por información entregada mediante respuesta a derecho de petición por parte de la administración del Conjunto Residencial Alejandría P.H, lugar donde se encuentra ubicado el inmueble, esta no detenta la calidad de poseedora.”***

La demandada MARÍA EUGENIA MARÍN OSORIO se pronunció en segunda instancia, indicando respecto de las pruebas practicadas por la A quo, (i) análisis respuesta al derecho de petición por el conjunto residencial, ***“No le asiste razón al recurrente y hace una lectura sesgada del documento. Manifiesta que de este documento se puede probar la calidad de poseedora de mi representada, dicho que dista de la realidad, pues dicho documento más que certezas lo que genera es dudas... por lo cual no se puede, como alega el recurrente, decir que es claro que mi prohijada sea la poseedora”***; (ii) respecto de los certificados de tradición de los inmuebles objeto del proceso, no decretada la nulidad de los negocios jurídicos subsiguientes al celebrado mediante escritura pública 31 del 10 de enero de 2003, ***“los subsiguientes quedaron incólumes, tanto así que, en certificado especial de pertenencia, expedido por la Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Medellín Zona Sur, certificado con número 2022-146540, certifican que la Titularidad del derecho real está a favor de REPRESENTACIONES SIERRA FAMILIA S.A.S NIT 9004184827. Certificado que anexo con el presente memorial”***; (iii) respecto del interrogatorio

de parte absuelto por la demandante, *“el juzgado fallador valoró en debida forma este testimonio, que no mostraba credibilidad, pues no era coherente, era titubeante, impreciso, entre otros aspectos resaltados por el a-quo, que le restaron credibilidad a dicho testimonio. Así mismo se dice en el recurso que sí bien existe alguna confusión sobre la fecha en la que inicio la posesión de mi representada, pero que ello quiebra la conclusión de la calidad de poseedora. Sin embargo, se omitió manifestar que aparte de que no se probó en qué momento se inició la posesión por parte de mi representada, mucho menos se pudo probar que en la actualidad mi representada tuviera la posesión, requisito sine qua non, dentro de la acción reivindicatoria”*; (iv) frente a su confesión ficta, *“concretamente a lo manifestado de la confesión ficta, el a-quo, basado en jurisprudencia y demás, desestimó la supuesta confesión, pues como bien lo dijo, esta admite prueba en contrario y dicha prueba es la que la misma parte demandante aportó al proceso, como el certificado de la administración, el interrogatorio absuelto por la señora Lucia Argemira, de lo cual no se puede establecer sin duda alguna, que mi representada sea la poseedora de dichos inmuebles pretendidos en reivindicación. Además, no es cierto que el juzgado desestimara este medio de prueba o que manifestara que no tenía operancia, lo que manifestó fue que existía precisamente, prueba que contradecía la presunta confesión”*; solicitando mantener incólume la decisión de primera instancia y no conceder las pretensiones de la parte demandante.

3.2 ¿Debe integrarse la sociedad REPRESENTACIONES SIERRA & FAMILIA SAS en liquidación como presunta poseedora?

El artículo 669 del C. Civil dispone que, *“El dominio que se llama también propiedad es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, no siendo contra ley o contra derecho ajeno. La propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad.”*

Por ello, se desprenden que en el propietario de la cosa se presume la calidad de poseedor en tanto ostenta las facultades de uso, goce y disposición; concordante

con lo previsto en el inciso 1 del artículo 764 del CC, ***“Se llama posesión regular la que procede de justo título y ha sido adquirida de buena fe, aunque la buena fe no subsista después de adquirida la posesión”***; y el inciso 2 del artículo 765 ibid, ***“Son traslaticios de dominio los que por su naturaleza sirven para transferirlo, como la venta, la permuta, la donación entre vivos. Pertenecen a esta clase las sentencias de adjudicación en juicios divisorios y los actos legales de partición”***; quién adquirió el dominio de la cosa se presume que detenta su posesión, presunción que puede ser desvirtuada.

Revisada la cadena traslaticia de dominio conforme anotación 20 certificado de libertad y tradición del predio 001-402909 y anotación 14 certificado de libertad y tradición del predio 001-402757, el último titular del derecho real de dominio de ambos predios fue REPRESENTACIONES SIERRA & FAMILIA SAS, dada venta efectuada mediante escritura pública 1189 del 10 de marzo de 2011; si bien la sentencia del 13 de agosto de 2019 declaró la nulidad del negocio jurídico celebrado mediante escritura 31 del 10 de enero de 2003 por el cual la demandante se desprendió del derecho real de dominio de los inmuebles, la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil Corte Suprema de Justicia delinea, ***“...Lo anterior implica que, si la declaración de invalidez de un negocio jurídico reintegra el bien al patrimonio del enajenante, ante la solución de continuidad del dominio, las tradiciones sucesivas realizadas quedan sin efectos. Esto se explica en el principio, según el cual nadie puede entregar más derechos de los que tiene. En tal caso lo que se afecta es el modo de la tradición y quedan a salvo los títulos que originaron la obligación de transferir, mientras no sean privados de sus efectos por decisión judicial”*** (SC3728-2020).

A través de sentencia SC3654-2021 la tradición en los términos del artículo 740 en concordancia con el artículo 756 CC -tratándose de inmuebles y respecto de la adquisición y transmisión de los derechos reales - refiere a los conceptos de título y modo, ***“mediante el título el interesado adquiere la mera posibilidad de que la transferencia del derecho se produzca, es decir que se erige en condición necesaria para que ese traspaso, apenas latente, se haga efectivo; en cambio,***

como la tradición concretaba o hacía efectiva esa transmisión, se le denominó como el modo...por mandato del artículo 756 ejúsdem, tratándose de inmuebles, la tradición se materializa mediante la inscripción del título en la oficina de registro de instrumentos públicos. Lo expuesto implica que la declaración de invalidez de un negocio jurídico reintegra el bien al patrimonio del enajenante. La solución de continuidad de las tradiciones del dominio no tiene otra explicación. Por lo mismo, los efectos de la falsedad de un título repercuten únicamente en las tradiciones sucesivas y deja incólumes los títulos correspondientes mientras no sean invalidados por decisión judicial. El fundamento de ello descansa en que nadie puede entregar más derechos de los que tiene.”

La parte demandada en escrito aportado en segunda instancia, solicitó al Tribunal confirmar la sentencia de la A quo en tanto no resultó acreditada su calidad de poseedora careciendo la demanda de uno de los presupuestos axiológicos de la pretensión reivindicatoria; en su escrito afirmó, “... ***no se puede decir que es claro que mi prohijada sea la poseedora***”, “***no se probó en qué momento se inició la posesión por parte de mi representada, mucho menos se pudo probar que en la actualidad mi representara tuviera la posesión***”, “***no se puede establecer sin duda alguna, que mi representada sea la poseedora***”; la lógica de esta clase de argumento, denominado *modus tollendo ponens* o silogismo disyuntivo, establece que si se nos dice que al menos una de las dos proposiciones es verdadera y se nos dijo que no es la primera la que es verdadera, se puede inferir que debe ser la última la que es verdadera; la demandada está de acuerdo con que no se acreditó en primera instancia su calidad de poseedora; además refiriendo que al no anularse en sentencia del 13 de agosto de 2019 todos los negocios jurídicos realizados sobre los inmuebles, incluyendo el acto traslativo de dominio celebrado entre esta y REPRESENTACIONES SIERRA

& FAMILIA SAS, fue la sociedad la última dueña acreditada, lo que no fue cuestionado en primera instancia.

Así, no existiendo certeza de quién ostentaba la posesión de los predios objeto de reivindicación –lo que fue avizorado desde la práctica del interrogatorio- y revisada la cadena traslaticia en los certificados de libertad y tradición donde consta que fue la sociedad la última quien detentó el dominio de los bienes, correspondía al Juez analizar si fue desvirtuada la presunción de posesión del último titular inscrito, debiendo integrarla al proceso en su calidad de presunta poseedora; siendo exigible hacerlo cuando en el expediente aparezca prueba de que la poseedora es persona diferente a la demandada; planteamiento que se refuerza con la afirmación realizada por la demandada en esta segunda instancia, insistiendo en que no existe prueba de su posesión y que la última dueña de los predios fue REPRESENTACIONES SIERRA & FAMILIA SAS.

Debiéndose vincular a REPRESENTACIONES SIERRA & FAMILIA SAS por aplicación extensiva y en los términos del último inciso del artículo 67 del CGP, *“Cuando en el expediente aparezca la prueba de que el verdadero poseedor o tenedor es persona diferente del demandado o del llamado, el juez de primera instancia, de oficio, ordenará su vinculación. En tal caso, el citado tendrá el mismo término del demandado para contestar la demanda.”*

3.3 ¿Nulidad por no practicarse en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas que deban ser citadas como partes?

Las reglas fijadas en la Ley para el impulso y resolución del proceso deben ser atendidas por las partes y por el funcionario judicial; la desatención de las formas procedimentales da lugar –en ocasiones- al decreto de la nulidad con la cual se priva de efectos las actuaciones defectuosas.

En términos de la sentencia SC4960-2015 Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, *“El legislador erigió como causales de nulidad adjetiva únicamente aquellos hechos que constituyen un evidente quebrantamiento de las normas básicas de procedimiento o que desconocen el derecho de las partes*

a ejercer su defensa o las bases esenciales de la organización judicial. Tales situaciones se encuentran contempladas en el artículo 133 del ordenamiento adjetivo, y también en el inciso final del artículo 29 de la Constitución Política como motivos excepcionales que pueden conducir al juzgador a declarar nulo el proceso total o parcialmente.”

Ha dicho la doctrina que el objeto de la declaratoria de nulidad, “*no es propiamente asegurar la observancia de las formas procesales, sino el cumplimiento de los fines a ella confiados por la ley para hacer efectiva la garantía constitucional de la defensa en juicio, lo cual constituye el fundamento de los llamados derechos procesales de las partes.*”¹

El numeral 8 del artículo 133 del CGP prevé como causal de nulidad al no practicarse en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas que deban ser citadas como partes.

El artículo 61 del estatuto procesal prevé la integración del contradictorio, “*Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas; si no se hiciere así, el juez, en el auto que admite la demanda, ordenará notificar y dar traslado de esta a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado.*”

El último inciso del artículo 134 ibid dispone, “*Cuando exista litisconsorcio necesario y se hubiere proferido sentencia, esta se anulará y se integrará el contradictorio.*”

¹ Alsina, Hugo. Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial, Tomo I. 2da. Edición, Buenos Aires: Ediar. Soc. Anón. Editores, 1956, p. 652.

Tratándose de la integración del contradictorio con aquel sujeto de derecho en quien se presume legalmente la posesión del predio objeto de reivindicación, se debió llamar a REPRESENTACIONES SIERRA & FAMILIA SAS en liquidación, para que surtida su integración se resolviera sobre la calidad que en virtud del negocio jurídico estipulado en escritura pública 1189 del 10 de marzo de 2011 se presume.

Surtido el estudio correspondiente para determinar la procedencia de confirmar o revocar la sentencia del 15 de febrero de 2023, se advierte una irregularidad insubsanable que da al traste con lo actuado, lo que invalida la sentencia de primera instancia; por ende, se considera que se incurrido en nulidad por no practicarse en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas que deban ser citadas como partes, al no integrarse el contradictorio de manera oficiosa con la presunta poseedora; declarándose la nulidad de lo actuado a partir de la providencia del 17 de enero de 2023 que decretó las pruebas y fijó fecha para audiencia –inclusive- dejando incólume las demás actuaciones anteriores que se surtieron, por lo que deberá la Juez de primera instancia proceder a integrar la litis y decretar las pruebas de oficio que estime necesarias para esclarecer los hechos objeto de controversia, el certificado de existencia y representación de la sociedad, la calidad de poseedora de quien debe integrarse y de la demandada primigenia, advertida la consecuencia legal dispuesta en los incisos 2 y 3 artículo 67 del CGP y emplea los poderes que el CGP le concede en materia de pruebas para verificar los hechos alegados por las partes, siendo su deber legal conforme delineamiento dado en el artículo 170 del CGP en concordancia con lo establecido en el numeral 4 del artículo 42 ibid.

La Sala Unitaria Segunda de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín

RESUELVE

PRIMERO: Por las razones expuestas, declarar la nulidad de lo actuado en el proceso desde la providencia del 17 de enero de 2023 que decretó las pruebas y

fija fecha para audiencia, inclusive.

SEGUNDO: Ordenar a la Juez de primera instancia integrar la litis con la sociedad REPRESENTACIONES SIERRA & FAMILIA SAS en liquidación como presunta poseedora y decretar las pruebas de oficio que estime necesarias para esclarecer los hechos objeto de controversia, el certificado de existencia y representación de la sociedad, la calidad de poseedora de quien debe integrarse y de la demandada primigenia advertida la consecuencia legal dispuesta en los incisos 2 y 3 artículo 67 del CGP, empleando los poderes que el CGP le concede en materia de pruebas para verificar los hechos alegados por las partes, siendo su deber legal conforme delineamiento dado en el artículo 170 del CGP en concordancia con lo establecido en el numeral 4 del artículo 42 ibid.

TERCERO: Las demás actuaciones practicadas dentro del proceso conservan su validez.

CUARTO: Devuélvase el expediente al Despacho de origen.

NOTIFÍQUESE POR ESTADOS Y ELECTRÓNICAMENTE.



RICARDO LEÓN CARVAJAL MARTÍNEZ
Magistrado